

ASISTENTES SOCIALES Y PERONISTAS VS. DIRIGENTES Y REFERENTES PIQUETEROS EN LA MATANZA: UNA REFLEXIÓN SOBRE GRADOS DE AUTONOMIA Y DEPENDENCIA CON EL ESTADO

Dra. Laura Colabella
MN-UFRJ - FLACSO
mlauracol@yahoo.com.ar¹

RESUMEN

Desde hace algo más de una década, organizaciones territoriales se han tornado interlocutoras del Estado al demandar, mediante “cortes” y “piquetes”, la gestión propia de “planes” y “mercaderías”, disputándoselos de esa manera a los municipios gobernados por el Partido Justicialista. De manera que, en el conurbano bonaerense (y en otras regiones del interior del país), dos son las vías que los vecinos tienen para acceder a recursos públicos: los “piqueteros” y los “peronistas”. Sin embargo, para la administración de esos bienes, el Estado concedía grados de autonomía diversos a ambos agentes. El artículo explora, desde una perspectiva comparada, la relación de interdependencia y los márgenes de decisión que el Estado concedía a cada uno. El foco son dos barrios del Municipio de La Matanza, un distrito gobernado por el Partido Justicialista desde 1983 y donde tuvo origen la Federación de Tierra y Vivienda, una de las mayores organizaciones sociales del país. La comparación permite identificar las condiciones de posibilidad de estos circuitos de redistribución donde actores distintos se disputan, mediante recursos estatales, la capacidad de movilización y el apoyo político de la población.

¹ Este trabajo desenvuelve aspectos presentados en un capítulo de mi Tesis doctoral defendida el 9 de marzo de 2009 en el Programa de Pos-graduação del Museu Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Fecha de realización: octubre de 2010. Agradezco los comentarios de Rosana Guber y de dos evaluadores/as anónimos/as a una versión preliminar de este artículo.
Fecha de aceptación: Diciembre 2011

Palabras clave: piqueteros, peronistas, márgenes de decisión, comparación.

ABSTRACT

For over a decade, territorial organizations have turned into regular spokespersons before the State by demanding that they be allowed to manage “social plans” and “goods” themselves, via “cuts” and “pickets”, thus disputing the former with municipal governments run by the Justicialista party. So much so that, within the area of Greater Buenos Aires (and in other regions from the interior of the country as well), there are two ways in which neighbours can access public resources, namely: “piqueteros” and “peronists”. Nonetheless, in order for these goods to be managed, the State has granted various degrees of autonomy to both agents. This article looks into the relationship of interdependence and the decision-making leeway that the State has given to each of these players from a compared perspective. The focus are two neighbourhoods from the district of La Matanza, which has been ruled by the Justicialista party since 1983 and where Federación de Tierra y Vivienda (Land and Housing Federation) originated (which is one of the largest social organizations in the country). This comparison makes it possible to identify the conditions of possibility existing for these redistribution circuits where different players fight for their mobilization capacity and for the political support of the population by using resources coming from the state.

Keywords: piqueteros, peronists, decision-making leeway, comparison.

INTRODUCCIÓN

En mayo de 1984, a poco de restaurada la democracia, fue lanzado el Programa Alimentario Nacional (en adelante, PAN) que ya constaba en la plataforma electoral de la Unión Cívica Radical. El mismo tenía alcance nacional y consistía en la entrega mensual de productos secos que los beneficiarios recibían en cajas cerradas a cambio de concurrir a actividades de capacitación. De ahí que fuera conocido y recordado como “las cajas PAN”. La vivienda precaria se consideró un indicador de la situación alimentaria de la población, a partir de la cual se inició el programa con aproximadamente 700.000 familias. La existencia de una política alimentaria de esas características revestía, según la literatura disponible, un carácter masivo y era un hecho nuevo en el país (Hintze 1989a y Golbert 1992). Algo de aquella modalidad, aparentemente impersonal, de redistribución de recursos continuaba vigente dos décadas más tarde cuando, en mayo de 2005, inicié formalmente mi trabajo de campo en el Municipio de La Matanza. En ese período, que se extiende entre 1984 y 2005, tuvieron lugar importantes transformaciones económicas conocidas como “políticas

neoliberales” y “Reforma administrativa del Estado”, que incluían políticas relativas a la privatización de empresas estatales, cambios sustanciales en las modalidades de contratación de trabajadores e inauguraban nuevas formas de intervención estatal en la gestión de políticas públicas. De esta manera, dichas políticas desarticulaban un proceso iniciado en los años 40, bajo el gobierno de Juan D. Perón, durante el cual se privilegió la promoción industrial y el pleno empleo mediante leyes laborales que otorgaban a los trabajadores la posibilidad de acordar sus salarios mediante convenios colectivos, vacaciones pagas, licencias por enfermedad e indemnización por despido. Desarticular los derechos sociales de los trabajadores (más precisamente, de los trabajadores formales y sindicalizados) fue una ardua tarea iniciada, brutalmente, con el golpe de estado de marzo de 1976 mediante la persecución y secuestro de numerosos trabajadores y líderes sindicales. El cierre de dicho proceso tendría lugar en la década del 90, bajo un gobierno democrático y, paradójicamente, bajo el signo de un gobierno peronista, cuando ya estaba desmantelada buena parte de la estructura sindical más combativa; entonces, era necesaria la intervención del Congreso Nacional para que dictara las leyes que, finalmente, instrumentarían las políticas de privatizaciones y de “flexibilización laboral” que, entre otras cosas, introducía nuevas formas de incorporación de trabajadores mediante contratos temporarios y tendía a la disminución del poder de los delegados sindicales. La consecuencia parecía anunciada: millares de trabajadores quedaron sin empleo en todo el país. La respuesta a dicho fenómeno consistió en la creación, en 1996, de los programas de empleo transitorio, o simplemente “los planes”, con los que se inauguraba una modalidad de intervención estatal ya no universal, gestada en torno al salario y extensible a todos los trabajadores de un gremio o sector, sino en torno a grupos específicos, calificados como “pobres” o “vulnerables”: “los jefes de hogar desocupados”, “los mayores de sesenta años en situación de pobreza”, “los niños menores a cinco años”, por nombrar unos pocos. Así, los planes representaron el pasaje de una política social “universal” a otra “focalizada” y financiada por los organismos multilaterales de crédito². Tales transformaciones dieron lugar a otro proceso de igual o mayor alcance: el surgimiento de organizaciones territoriales que se erigirían en portavoces de los desocupados y estructurarían sus demandas en torno al empleo. Las mismas tuvieron su origen en diversos municipios del conurbano bonaerense al abrigo de otras organizaciones locales, como las juntas vecinales, las sociedades de fomento, las ollas populares y las Comunidades Eclesiales de Base, desde donde se constituyeron nuevas formas de liderazgo por fuera de las estructuras partidarias. Estas organizaciones harían su aparición en la escena pública de manera frontal al interrumpir, durante días e incluso semanas, el paso de las rutas nacionales, como ya lo hacían en las ciudades petroleras lejanas de Cutral-Co y

² Los primeros programas de empleo transitorio fueron los programas Trabajar que consistieron en subsidios de entre 150 a 300 pesos a cambio de tareas de contraprestación en “proyectos de trabajo” en áreas de construcción, en establecimientos escolares o centros comunitarios, redes de agua potable, entre otras. Tuvo tres versiones y fue financiado por el Banco Mundial. Estos fueron los planes que las organizaciones de desocupados disputaban a los municipios al reclamar, mediante piquetes, la gestión propia de los mismos. Su duración se extendió hasta el 2002 cuando la totalidad de los beneficiarios fueron adjudicados al Programa Jefes y Jefas de Hogar creado en ese momento.

Plaza Huincul, en Neuquén, y en Mosconi y Tartagal, en Salta, los trabajadores despedidos de YPF. Pero esta nueva forma de movilización comprendía además técnicas ritualizadas para manifestar el corte y la ocupación de la ruta: el área se demarcaba con cubiertas encendidas y se montaban campamentos donde pernoctaban los manifestantes. Esta organización espacial constituía un lenguaje, que era expresión de un conflicto, que reclamaba la gestión propia de los planes sociales diseñados originalmente para ser redistribuidos por los municipios gobernados, en su mayoría, por el Partido Justicialista. Desde entonces las organizaciones territoriales se constituyeron en interlocutoras del Estado y su modalidad de protesta, el “piquete”, en expresión de la demanda por el empleo, que pretendían, a su vez, hacer visible ante la sociedad civil. Así eran “peronistas” y “piqueteros” los agentes que, en los barrios bonaerenses, inscribían a los “vecinos” en planes y mercaderías, tornándolos “beneficiarios”.

Cuando en mayo de 2005 tomé contacto con Rubén, referente peronista del barrio Santa Rita, y en enero de 2006, con los piqueteros de la FTV, para iniciar mi investigación (que se prolongaría hasta marzo de 2007), rápidamente identifiqué que, si bien los recursos que ambos recibían provenían de los mismos organismos oficiales (Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires), las modalidades de asignación a sus vecinos, las obligaciones que creaban con “su gente” y los grados de autonomía con que ejercían esa tarea eran disímiles.

Claro que el interés por esa problemática no era nuevo. Desde hace algo más de una década, las políticas asistenciales del Estado, ya sea bajo la forma de subsidios a desocupados o mediante la entrega de alimentos, eran tratadas como objetos en circulación a cambio de votos, de apoyo político o de la participación en piquetes y movilizaciones. La presencia del voto, como moneda principal de cambio en redes de redistribución de recursos públicos, es un rasgo distintivo de los estudios denominados de “clientelismo político” que reproducen el tratamiento reduccionista con que la ciencia política trata el fenómeno clientelar al enfatizar el carácter instrumental e interesado del intercambio (Auyero 1997 y 2001)³. Por el contrario, cuando los mismos recursos son analizados por la literatura sobre movimientos piqueteros, el voto ya no forma parte de la retribución por los recursos cedidos sino que allí se imponen aspectos menos instrumentales e intangibles y, en apariencia, menos cuantificables, como la “participación” y “compromiso con el movimiento” y las formas de autoridad de quienes ocupan posiciones jerárquicas al interior de las organizaciones. Sin embargo, la aparición de las organizaciones de desocupados en el escenario político fue percibida, por buena parte de la literatura sobre movimientos piqueteros, de modos diferenciados, ya sea en su visión positiva, como un desafío al monopolio político del PJ, como también de manera negativa, en tanto

³ Son numerosos los trabajos que revisan y objetan esta visión del “clientelismo”: ver Soprano (2002, 2005 y 2008), Rodríguez (2005) y Masson (2002), que cuestionan la figura del mediador, el foco puesto en un momento de una relación más amplia y extensa y las performance de Evita de las mujeres peronistas. Más recientemente fue observado el tratamiento concedido a los valores morales puestos en juego en las relaciones de intercambio de recursos estatales por votos, donde el agradecimiento, el compromiso y la amistad son entendidas más que como formas de la reciprocidad, la moralidad y el afecto son considerados en tanto “creencia”, “representación” o “ideología”, restándoles peso explicativo (Quirós 2010).

suponía la pérdida de autonomía de las organizaciones y su institucionalización como agente mediador entre el Estado y la población (Svampa y Pereyra 2003, Mazzeo 2004 y Delamata 2004).

Sin embargo, los dualismos con que muchas veces son tratadas las organizaciones de desocupados (si el piquete más que una modalidad de protesta *contra* el Estado fue una forma de establecer diálogo *con* él o también si el “puro interés” anunciado por los estudios clientelares se contraponen al “no instrumentalismo” de los movimientos piqueteros) fueron visiones superadas por estudios etnográficos que recuperan la dimensión vivida de las acciones denominadas “políticas”, las tramas en las que se inscriben y los lazos que crean con sus vecinos, unidos no sólo a través de recursos estatales sino también por lazos de proximidad, amistad y parentesco (Ferraudi Curto 2006, Manzano 2007 y Quirós 2006, 2008 y 2010).

En este trabajo me propongo hacer un giro en el eje de la discusión y correr el foco de las formas de la competencia entre “peronistas y piqueteros” en un municipio bonaerense hacia ese actor omnipresente que es el Estado y que contribuye a “crear las oportunidades”, para seguir la terminología de Tilly y Wood (2003), Diani (2003) y McAdam (2003), para que los movimientos y organizaciones constituyan sus formas de reclutamiento y movilización y, en definitiva, crean la dinámica y los mecanismos que animan su constitución y mantenimiento. O, más precisamente y para ser más claros, propongo detenerme en los grados de autonomía que el Estado concedía a peronistas y piqueteros a la hora de asignar recursos a sus vecinos. Como veremos, los grados de libertad que resultaban de la normativa que los organismos oficiales imponían a los planes y a la asignación de alimentos eran distintos para agentes municipales ligados al PJ que para los referentes piqueteros. Me refiero específicamente a la posibilidad de “dar de baja” (cancelar el recurso, en caso de los planes) y a la posibilidad de decidir si los alimentos eran los mismos para todas las familias, en el caso de la mercadería. Como el lector podrá comprobar, esos márgenes de maniobra tenían límites diversos para los dos agentes en cuestión. Esto es, abría campos de decisión más amplios a unos que a otros⁴. Allí donde los piqueteros podían dar “altas” y “bajas”, es decir, reemplazar beneficiarios, los peronistas sólo podían inscribir y hacer reclamos pero la posibilidad de reemplazo les estaba vedada, en particular en relación con los planes. De manera tal que resulta lícito preguntarse: ¿cómo era posible que movimientos sociales, surgidos poco más de dos décadas atrás, estuvieran allí ejerciendo una tarea históricamente asignada a agentes estatales y municipios gobernados por el Partido Justicialista con quienes se disputaban recursos y personas y, más aun, con quienes mantenían grados de autonomía más amplios?

La ventaja de explorar estos extensos circuitos es que nos introducen en una red que involucra tanto a organismos oficiales, partidos políticos, movimientos sociales, con redes de vecinos, parientes y allegados, aquello que Mauss (2003) definió como “sistemas de prestación total” que, al poner

⁴ Es la noción de “figuración” la que nos ayuda a inscribir estos circuitos en tramas de relaciones de “dependencia recíproca” entre el Partido Justicialista y las organizaciones de desocupados con el Estado y viceversa (Elías 1991).

en relación instituciones tan diversas, se constituía en un prisma desde el cual observar un sistema que erige normas de derecho, reglas morales y obligaciones recíprocas. En definitiva, un sistema social en funcionamiento podía ser observado tomando como punto de partida planes y mercaderías para, desde allí, explorar cómo se tejen relaciones no sólo entre peronistas y piqueteros con personas sino también entre el Estado, los movimientos y el Partido Justicialista. En este artículo me propongo entonces poner la mirada en el margen de decisión que el Estado concedía a piqueteros y peronistas a la hora de redistribuir recursos públicos. A través de ese ejercicio comparativo, me propongo también presentar algunas reflexiones que me interesan particularmente y que no han sido exploradas por la literatura sobre movimientos sociales y que, en definitiva, constituyen el objetivo principal de este texto: ¿cuáles eran las condiciones de posibilidad de estos circuitos y, más precisamente, en qué medida el Estado creaba las oportunidades para la constitución de los mismos y en qué grado dependía de ellos?

A los fines organizativos de este texto, en la primera parte presento las evidencias recogidas en un barrio peronista y, seguidamente, las registradas en el asentamiento que funciona como la sede oficial de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV, en adelante). Con ellas pretendo señalar puntos de contacto y dispersión en lo que respecta a los grados de libertad que ambos agentes manejaban respecto de los recursos. Por último, me propongo poner el foco sobre el grado de dependencia que el Estado tiene con los movimientos piqueteros, pues sólo de esa manera podremos conocer las condiciones de posibilidad de estos circuitos de redistribución. Tal decisión tiene la ventaja de permitirnos conocer mediante qué mecanismos el conflicto social era neutralizado y cómo se sostenía el equilibrio de fuerzas que enfrentaba a peronistas y piqueteros que coincidían en los mismos barrios disputándose, mediante recursos, la capacidad de movilizar a la población. Al mismo tiempo, veremos que el Estado, más que un actor monolítico que provee recursos, aparece desdoblado en redes de relaciones que integran personas de carne y hueso, quienes desafían y redefinen los límites de diversos campos de especialización académica, como las políticas públicas, los movimientos sociales y la política.

CASA POR CASA. ASISTENTES SOCIALES Y REFERENTES PERONISTAS ADJUDICAN MERCADERÍAS

“Me voy” me dijo Rubén, referente peronista⁵, candidato a concejal por el Frente para la Victoria y vecino del barrio Santa Rita, cuando el camión verde del ejército llegaba con la mercadería. “Me tienen hartos que digan que doy la mercadería por un voto... aparte cuando salta uno atrás saltan todos” y, como

⁵ He optado por no denominar a Rubén como “puntero”, como podría definirlo la literatura sobre clientelismo político, por dos razones: en primer lugar, por ser un término peyorativo del juego político que descalifica a un oponente al acusarlo de perseguir sólo el interés por los votos y, en segundo lugar, porque no funcionaba como categoría de autoidentificación. Así, opté por la noción de “referente” que era a la que él apelaba para definirse como así también la de “militante” y “soldado de Balestrini”. Esta última referencia se debe a que Rubén reconocía a Balestrini (intendente del Municipio) como su jefe político con quien “trabajaba” desde hacía más de quince años.

por arte de magia, desapareció en su preciada camioneta azul⁶. De manera abierta y frontal Rubén reclamaba de sus vecinos ser percibido como quien, con su actividad, a la que calificaba como una “entrega”, solo perseguía el puro interés⁷. Por aquel julio de 2005, mi trabajo de campo en ese barrio llevaba ya dos meses durante los cuales llamó inicialmente mi atención el trato diferencial concedido a planes y mercaderías.

Rubén vivía en Santa Rita desde 1966, luego de transitar, junto a su familia, por diversas “villas” de la ciudad de Buenos Aires y poco después de llegar de su Tucumán natal, cuando cerró el ingenio azucarero en que trabajaba su padre. En Santa Rita conoció a Nina, su mujer, con quien tuvo diez hijos y tres nietos. Rubén “trabajaba en política” gracias a la invitación que le hizo su compadre Gabriel, quien lo convidó a armar una “agrupación” que encabezaba Balestrini, intendente del municipio. Por su desempeño y lealtad, Balestrini premió a Rubén con un puesto estable en la planta de trabajadores municipales. Tenía, a su vez, inscriptos a unos ochenta vecinos en el plan Jefes de Hogar, los que dependían de él para el cumplimiento de las tareas comunitarias. Sin embargo, recogí relatos diversos sobre el procedimiento de la inscripción: algunos fueron inscriptos en casas, mediante la visita de Rubén o de Nina; y otros, por el contrario, lo hicieron a la manera formal, acercándose a escuelas próximas habilitadas para tal fin, las que, a su vez, estaban bajo la jurisdicción de Rubén que coordinaba el operativo de inscripción en un área que cubría tres localidades de La Matanza⁸. No obstante, eran otros los agentes preparados para la inscripción a la mercadería: asistentes sociales del municipio visitaban a todos los vecinos con la finalidad de evaluar sus viviendas y así establecer si calificaban como beneficiarios para recibir la bolsa de alimentos. Aquella mañana en que Rubén dejó el barrio indicó a El Tucu, su hombre de confianza y encargado de cuidar las instalaciones del club del barrio, que me llevara hasta la capilla donde estaba Zulema, la asistente social que coordinaba la entrega de la mercadería.

La presencia de asistentes sociales no era registrada y menos aún explorada por la literatura sobre clientelismo y movimientos sociales. Sin embargo, su participación como “profesionales de la asistencia social”, que hacen uso de técnicas que dan atención “caso por caso” para evitar el abuso que (de la asistencia social) podían hacer “los falsos pobres”, puede ser pensada, siguiendo a Grassi (1986), como un mecanismo de control impuesto por el Estado en orden de evitar conflictos sociales y de garantizar un uso “adecuado”

⁶ Las voces de mis interlocutores de campo aparecen entre comillas a lo largo del texto. Agrego a la vez que los nombres propios han sido alterados: sólo mantuve los nombres reales de las personas de conocimiento público. Modifiqué también los nombres de los barrios: sólo conservé el nombre real del municipio donde realicé la investigación.

⁷ Para una discusión de las visiones instrumentales de la política en sectores populares, ver Quirós (2008).

⁸ El Programa Jefes y Jefas de Hogar fue creado en enero de 2002, mediante el decreto 165, luego de las intensas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, para asistir a “jefes” desocupados por el lapso de tres meses. Posteriormente, esa limitación fue cuestionada por diversos sectores que componían la “Mesa del Diálogo” (un foro que presidía el entonces presidente Duhalde e integraban la Iglesia, sectores políticos, empresariales y sociales) y que recomendaron “universalizar” el subsidio para asegurar un mínimo ingreso mensual a “todas las familias argentinas”. A comienzos de 2003, el Programa daba cobertura a dos millones de personas en todo el país. El beneficio consistía en el pago mensual de 150 pesos a cambio de tareas comunitarias de contraprestación.

de los recursos disponibles⁹. Aquella mañana en la capilla pude comprobar cómo funcionaba en la práctica dicha aseveración. En primer lugar, llamó mi atención que Zulema demarcaba su posición de agente estatal, vistiendo un guardapolvo blanco al igual que médicos y maestros. Fue El Tucu quien nos puso en contacto cuando le dijo: “Ella está con Rubén y quiere ver cómo es”. Seguidamente y sin demasiado preámbulo, se dispuso a explicarme que las familias recibían “una bolsa por casa” luego de ser “censadas con un cuestionario socioeconómico... porque acá como la gente no paga nada hay casas que están muy bien”, sentenció. Para que comprendiera la medición a la que se refería, me ofreció una muestra *in situ* al señalarme en algunas viviendas la presencia de rejas, de entradas revestidas con ladrillo a la vista, como las que “estaban bien y bien equipadas por dentro”, a las que comparó con otras con entradas más precarias. Esos eran los indicadores que el censo socioeconómico consideraba para calificar las viviendas: el equipamiento del hogar, la presencia de materiales de construcción y revestimiento y la identificación de los habitantes que tenían domicilio allí. Mientras conversábamos, la fila en la capilla se extendía a medida que avanzaba la mañana pues allí los vecinos debían presentar sus documentos para ser verificados en un listado donde se contaban los beneficiarios habilitados para recibir su bolsa, luego de lo cual, y mediante un estrecho pasillo, se dirigían a la calle principal del barrio donde se apostaba el camión y se entregaba a cada uno la bolsa respectiva. Las bolsas contenían los mismos ocho productos de alimentos secos, entre los que se contaban arroz, azúcar, polenta, lentejas, una lata de carne, un dulce y una botella de aceite. Hasta aquí podemos reconocer ampliamente la profunda huella que el Programa PAN de 1984 había instituido como modalidad para conceder alimentos a los sectores calificados como “pobres”. “Me voy... me voy”, insistió Rubén antes de subirse a la camioneta, “porque creen que soy yo el que da y el que quita porque, como es casa por casa y ellos se cambian, a muchos les sacaron y a otros que pusieran negocios grandes también les sacaron.” Esas fueron las últimas palabras de Rubén antes de subirse a la camioneta, bien premonitorias de lo que iría a ocurrir. Eran cerca de las 11 cuando Zulema se dirigió al conjunto de personas reunidas y dijo: “hay mucha gente que salió del sistema”, cuando algunos de los vecinos eran comunicados que no recibirían su mercadería. El clima se iba poniendo tenso y, finalmente, otra mujer, también de guardapolvo blanco, hizo su aparición. Fue ella quien pasó a explicar a los vecinos excluidos las razones de su exclusión: “Lo que pasa es que en esa casa echaron al censista cuando pasó... ahí no había nadie cuando el censista pasó o no... a su hijo no le corresponde porque él vive en un cuarto de casa y se cuenta una por casa aunque él ya tenga familia.” Esos fueron los argumentos de las bajas. El clima tenso continuaba en la calle, al pie del camión cuando las personas exaltadas gritaban: “ya empezaron las bajas menos de ellos”. Cerca de las 14 horas el camión se retiró y Zulema y su compañera dejaron Santa Rita.

⁹ Acerca de la asistencia social y del rol del trabajador social en la Argentina, ver especialmente Alayon y Grassi (1983) y Grassi (1986). Otras referencias a las Sociedades Filantrópicas norteamericanas, en las cuales el modelo argentino encuentra inspiración, pueden encontrarse en Zelizer (1994).

Al día siguiente, en el club del barrio, adonde concurrían los vecinos para firmar su asistencia a las tareas comunitarias de los planes, no se hablaba de otra cosa y Rubén aseguró a todos los que se acercaban: “vamos a pasar alrededor de las cinco para el socioeconómico porque pasan y muchos no están que se fueron al club o que están durmiendo”. Esa misma tarde Rubén *pasó* por las viviendas para censarlas, con uno de los muchachos que lo acompañaban en las pintadas nocturnas de los candidatos. Llevaban la tarea con el mayor celo, sin permitir que nadie se les acercara. Podía reconocerse en esa actitud un gesto de cierta complicidad en parte, debido a que la tarea de la adjudicación de la mercadería correspondía, formalmente, a las asistentes sociales, cuyos títulos académicos las habilitan para censar y calificar las viviendas para acceder al recurso. En ese sentido, la intervención de Rubén responde más bien a un mecanismo informal como una posibilidad que le abría su posición de agente municipal y candidato a un cargo electivo por el partido que era gobierno. En varias oportunidades en que la entrega se demoraba, lo escuché insistir por radio al Comité de Crisis¹⁰, que coordinaba la entrega de la mercadería en catorce barrios del municipio, que adelantaran la entrega a un viernes en lugar de un lunes “porque para las familias se hacía muy duro pasar el fin de semana sin la mercadería porque esos días no hay comedores.” De modo que si bien, formalmente, las asistentes sociales controlaban la inscripción de los vecinos para recibir la mercadería, en ciertas circunstancias la intervención de Rubén era ineludible para restituir el equilibrio de fuerzas que se había roto con el último censo. En aquella oportunidad, eran ochenta familias, de las casi 400 que recibían su bolsa, las que habían sido excluidas de la lista de beneficiarios. Por otra parte, las asistentes sociales no residían en el barrio y dejaban varias viviendas sin censar, como muchas veces los escuché reclamar a Rubén y a Nina, su mujer. Así, referentes peronistas y asistentes sociales operaban mediante lógicas distintas. Allí donde las asistentes sociales debían imponer “un criterio” impersonal (la vivienda precaria), Rubén se amparaba en otra racionalidad. Aquel día en que visitó a los vecinos restituyó la mercadería a una casa en que el jefe de familia había sido operado, a un sobrino recién casado y a un grupo de mujeres que colaboraban con el comedor que, desde hacía pocas semanas, había comenzado a funcionar en Santa Rita. En el primer caso, la *necesidad*, en el segundo, un *favor* y en el tercero, un *agradecimiento*. Lógicas diversas amparadas en valores morales de distinta jerarquía¹¹.

De manera que los mecanismos formal e informal no son excluyentes, más bien lo contrario: se requieren mutuamente para performar el principio moral en que se ampara el procedimiento burocrático ideal: “impersonal” y “formalmente igual para todos” (Weber 1996). Sin embargo, si el procedimiento formal e informal se requieren mutuamente, llama la atención que los vecinos perciban a Rubén como aquel que tiene el control absoluto del circuito: “creen que soy yo el que da y el que quita” (como me lo advirtió antes de subirse a

¹⁰ El “Comité de Crisis” se denominaba así por haberse constituido luego de los episodios de diciembre de 2001 y estaba presidido por el intendente Balestrini e integrado por las dos organizaciones de desocupados del Municipio: la FTV y la CCC.

¹¹ Los mismos valores morales son también señalados como lógicas con predominancias y jerarquías diversas en otros contextos (ver Quirós 2008).

la camioneta). Como en otros contextos del conurbano, los vecinos percibían a Rubén como “dador directo” aun cuando agentes formalmente enfundadas en guardapolvos blancos visitaban sus hogares con la finalidad de ofrecer los mismos. No obstante, debemos distinguir que las asistentes sociales estaban formalmente obligadas a visitar todas las casas. Por el contrario, Rubén no visitaba todas las casas sino aquellas con las que mantenía un lazo personal, atendiendo “caso por caso”¹². De modo que para los vecinos quedaba claro que, más que para ofrecer mercaderías, la presencia de las asistentes sólo tenía por propósito “calificar” las viviendas, una presencia que generaba entre temor y desconfianza, a tal punto que muchas familias se negaban a recibirlas. Por el contrario, la presencia de Rubén era claramente identificada no sólo como la de quien tiene algo que ofrecer (alimentos, en este caso) y pide algo como retribución (el voto) sino también como quien puede reparar las exclusiones que resultaban de los criterios impersonales que aplicaban las asistentes sociales. Es decir que Rubén *daba* y también restituía a quien quedaba excluido, lo que contribuía a que fuera percibido como quien tiene el control absoluto de la redistribución o como un dador directo (Quirós 2006 y Manzano 2007) que daba protección a sus allegados (“empezaron las bajas menos de ellos”). De manera que lo que parece estar en juego no es un lazo entre la población y el Estado a través de la figura de un mediador, y menos aún entre “patrones políticos” y sus “clientes”¹³, sino entre referentes políticos y vecinos, expresados en términos de ayudas, favores y agradecimientos recíprocos (Quirós 2008). O, más precisamente, se trataba de una relación que unía a vecinos que decían conocerse *de toda la vida*. En algún sentido entonces, la redistribución de recursos era un circuito que unía a iguales o a personas con mínimas diferencias estatutarias.

ES PARA EL PENAL. LOS CRITERIOS DE LOS PIQUETEROS

“Mira que nosotros repartimos todo el año y no solamente cuando hay elecciones”, me dijo el encargado del depósito de la mercadería, en medio de grandes pilas de arroz, azúcar y otros alimentos, el primer día que visité el asentamiento el Ingenio, sede oficial de la FTV. Enseguida Julio, el segundo de la organización, se acercó al depósito con una bolsa de compras y dijo al encargado: “pone acá todo lo que haya para Mario que se va mañana a visitar al hijo al penal...”.

Desde el inicio, los piqueteros hicieron denodados esfuerzos por diferenciarse de los peronistas: dar no sólo cuando hay elecciones o también “nosotros lo que tenemos es por nuestra lucha y no porque te lo bajan del gobierno.” Esas expresiones que, en apariencia, demarcaban oposición con las formas de redistribución de los peronistas podrían ser leídas desde una lógica dicotómica y asegurar que allí donde los peronistas decían *hacer política* los

¹² La “visita casa por casa”, según Rosato, forma parte del “trabajo” de la militancia. Sin embargo, la autora señala que los militantes no visitan “cualquier” casa sino aquellas en las que se los “conoce”, en las que tienen una relación personal o política previa. Para más información, ver Rosato (2003).

¹³ Recientemente me he referido a los peligros y dificultades de apelar a esas categorías para analizar circuitos de intercambio en el conurbano. Para más información ver Colabella (2010).

piqueteros aseguraban encarar una *lucha social* que libraban en la ruta mediante movilizaciones y piquetes. Pero, sin embargo, para los miembros de la FTV, los términos “lucha” y “política” no eran opuestos o, más bien, no eran categorías excluyentes. El Presidente de la FTV había sido Concejal por La Matanza entre 1997 y 2001, y Diputado provincial entre 2001 y 2005¹⁴. Incluso, uno de sus dirigentes se presentó como candidato a Diputado provincial por el Frente de la Victoria en las elecciones de octubre de 2005, la misma lista que llevaba de candidato a Rubén, nuestro referente de Santa Rita.

Cuando tomé contacto con la FTV en enero de 2006, “la vida en el piquete”¹⁵ formaba parte del pasado que muchos de ellos evocaban de diversas maneras: para algunos era una prueba de su valor (“yo me gané lo mío cuando estuve dieciocho días en la ruta”); para otros, parte de una épica (“faaa si habré ido a piquetes... en esa época vivía en la ruta, tendría que escribir un libro”) y también, como expresión de aquello que se hace por necesidad (“iba pero casi no veía a mis hijos... lo hacía para poder darle algo a ellos”). Por aquel entonces, la vida de la organización transcurría en la sala de primeros auxilios del asentamiento El Ingenio y coincidía con una época de celebración para el movimiento: el barrio, conformado por la “toma de terrenos”, cumplía veinte años de existencia¹⁶, a la vez que D’Elía era convocado por el entonces presidente Néstor Kirchner para ocupar la Secretaría de Tierras y Hábitat Social y se convertía, de esa manera, en un funcionario de primera línea del gobierno nacional. Pero, como decía, una buena parte de la vida de la organización transcurría en “la sala”. Era allí donde, diariamente, concurrían dirigentes, referentes y vecinos para conocer las fechas de pago de los planes, de entrega de la mercadería y el calendario de las movilizaciones. La FTV tenía inscriptos a vecinos en dos programas de empleo: el Jefes y Jefas de Hogar¹⁷ y el Programa de Empleo Comunitario (PEC)¹⁸. Según me reveló uno de los dirigentes: “el PEC fue un plan que pedimos nosotros porque los beneficiarios no necesitan tener hijos como en el Jefes... nosotros teníamos muchos abuelitos y personas que no tenían hijos menores.” A la vez, los habilitaba a dar altas y bajas, es decir, a reemplazar a unos beneficiarios por otros, una posibilidad que estaba vedada en la reglamentación del Plan Jefes de Hogar. La sala se ubicaba en diagonal al depósito y, desde la ventana, podía observarse cuándo los camiones que proveían los alimentos eran descargados por un grupo de jóvenes. En esas ocasiones, eran permanentes los comentarios acerca del volumen y el tipo de alimentos recibidos, pues la entrega no tenía una fecha fija y los volúmenes acordados no siempre eran respetados por las

¹⁴ En la primera oportunidad, lo hizo en la lista del FREPASO, que lideraba Carlos Chacho Alvarez, y posteriormente, con el POLO SOCIAL, un agrupamiento que se definía como “suprapolítico” y que lideraba el cura Farinello. Ambas agrupaciones tenían una composición heterogénea en la que coexistían peronistas, dirigentes sindicales, socialistas, dirigentes sociales, religiosos y figuras del mundo académico.

¹⁵ Recupero la expresión de Auyero (2002).

¹⁶ Para un análisis minucioso de la ocupación de El Ingenio y otros barrios del distrito de La Matanza ocurridas en 1986, consultar Merklen (1991).

¹⁷ En enero de 2006, en el Municipio de La Matanza, eran 61.039 los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, información obtenida de www.trabajo.gov.ar. el 19 de enero de 2006. De ellos, sólo 3000 manejaba la FTV, el resto eran gestionados por el Municipio.

¹⁸ El PEC fue creado en el 2002 para reunir a las personas que no podían cumplir con los requisitos del Jefes y sólo era administrado por las organizaciones de desocupados.

autoridades ministeriales. Cada referente manejaba un *cupo* para planes y otro para mercaderías, que resultaban de acuerdos personales con los dirigentes y que debían retirar del depósito, asumiendo los gastos del flete hasta sus hogares donde tenía lugar la entrega respectiva¹⁹.

Gabriela era una de las referentes que menor jerarquía ocupaba: solo recibía un cupo de mercadería para diez personas. Desde hacía varios meses, había cerrado la copa de leche que funcionaba en su casa y de los treinta y cuatro planes que alcanzó a tener “se le cayeron” veintiseis (inclusive ella misma había perdido su plan). Esa situación la obligó a “salir a trabajar”. Por esa razón, aseguraba que, en relación con el movimiento, “no estaba haciendo nada”, sólo llamaba “a su gente, cuando había movilización”. De manera que su concurrencia a la sala se reducía a una vez cada quince días y, en particular, para conocer las novedades en relación con la entrega de los alimentos por la que muchos de sus vecinos la consultaban.

Las entregas discontinuas eran un verdadero problema para los referentes, que resolvían de maneras diversas, imponiendo criterios propios que, como ya dijimos, se amparaban en lógicas que jerarquizaban valores morales que se inscribían en momentos diversos de la redistribución:

Una vez nos quedaban debiendo dos meses la mercadería... ellos (*la organización*)... dos o 3 meses y un chabón... se pensó que yo la retiraba y me la estaba encanutando (*guardando, robando*) y vino borracho y me dijo ‘ehhh vos la mercadería... te la estas encanutando...’. Y le digo ‘si yo la retiré hace dos meses... pero estoy esperando para que me den más mercadería porque si yo te doy a vos a ella no le doy, y el tampoco y es un injusto’. Y yo estaba con el padre de ella (*su ex marido y padre de su hija*) y le dijo ‘y vos quien sos...’ y se empezaron a agarrar a piñas ahí afuera... Pero fueron ellos que nos debían... después nos dieron la mercadería... entendés y este chabón hizo cualquiera.

Para nuestra referente “era injusto” no poder entregar la mercadería a todas las personas que participaban de la copa de leche: por esa razón, acumular productos le permitía preparar “bultos” más grandes con más productos para todos. Como vemos, los márgenes de decisión son notoriamente más amplios para Gabriela que para Rubén. No sólo porque no había allí ningún agente del Estado que ejerciera control sobre los modos en que ella asignaba los recursos sino también porque los referentes podían decidir qué alimentos entregar, a cada vecino, del volumen que les era entregado. Sin embargo, a mayor amplitud de decisión mayor era también el nivel de las acusaciones. Si Rubén “daba por un voto”, es decir, buscaba el “puro interés”, Gabriela “encanutaba”, esto es, ni siquiera cumplía con su obligación como referente de una organización: *dar*.

Pero, ¿cómo era que esa competencia entre peronistas y piqueteros se había tornado posible? O, más precisamente, como formulé al comienzo de

¹⁹ Para un análisis de la constitución y funcionamiento de múltiples organizaciones sociales, religiosas y políticas en las tramas cotidianas de un barrio de Santiago del Estero donde las actividades tenían lugar en los hogares de los referentes, consultar Vommaro (2006).

este artículo: ¿cómo era posible que movimientos sociales surgidos a fines de la década de los 90 *estuvieran allí* disputando recursos y el apoyo político de la población nada menos que al Justicialismo, un partido político surgido en la década del 40 que logró capitalizar, a lo largo de más de seis décadas, la adhesión política de la clase trabajadora y los sectores populares? Para entender cómo fueron posibles tales desdoblamientos se torna necesario inscribir estos circuitos en cuadros sociales más amplios.

EL ESTADO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: DEPENDENCIA RECÍPROCA Y MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO DE FUERZAS

La literatura clásica sobre movimientos sociales y acción colectiva ha llamado la atención acerca de los ciclos y el repertorio de protesta, las oportunidades políticas creadas por los Estados para el surgimiento de los mismos, y las redes y los medios a partir de los cuales los movimientos cobran fuerza, ganan adeptos y dan forma a su despliegue (Tarrow 2004 y Tilly 2003, 2004). En particular, el foco está siempre puesto en cómo los Estados nacionales crean una estructura de oportunidades para la acción colectiva y cómo los movimientos sociales sacan partido de ello (Tarrow 2004), y, en menor o nula medida, se señala cuál es el partido que los Estados sacan de los movimientos. En ese sentido, los trabajos de la antropóloga brasileña Lygia Sigaud (2000 y 2005) constituyen una excepción al conceder atención no sólo a la dependencia de los movimientos sociales como el MST (Movimento Sem Terra) respecto del Estado sino también en sentido inverso, al señalar que el Estado, en ausencia de una política propia de desapropiaciones, depende de los movimientos que le indican, por medio de las ocupaciones y los campamentos, las haciendas por ser objetos de su intervención (Sigaud 2005). Las transformaciones ocurridas en la industria azucarera, según Sigaud, como la eliminación de subsidios que garantizaban el precio del azúcar y la privatización de las exportaciones desencadenaron una crisis que terminó con la pérdida del empleo de millares de trabajadores y muchos ingenios fueron declarados improductivos. En ese contexto, los movimientos y los sindicatos hicieron de las ocupaciones, en los ingenios improductivos, una forma legítima de reivindicar una reforma agraria en el Brasil.

Siguiendo esta última línea de análisis, Manzano (2007) apuntó que el piquete se tornó una forma legítima de interpelar al Estado la gestión propia de recursos cuando, en el año 2000, los aumentos en los índices de desocupación, el tipo de intervención estatal centrado en los programas de empleo, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un plan a partir de su vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes (las bajas) en los planes, contribuyeron a que, mediante el piquete, las organizaciones de desocupados comprometieran al Estado con sus demandas. A riesgo de ser simplistas y maniqueos, casi podríamos decir que porque había planes (y mercaderías) había piqueteros. Ahora bien, una nueva perspectiva de análisis se abre si damos continuidad al giro iniciado por Sigaud al percibir y entender a la dependencia en términos recíprocos, pues, siguiendo esa perspectiva, podemos vislumbrar que, al conceder planes y mercaderías

a los movimientos piqueteros, el Estado se liberaba de organizar, capacitar y financiar técnicos para los extensos operativos de inscripción, como los que coordinó Rubén en el 2002, a la vez que se desentendía de la intervención de agentes, como las asistentes sociales, para performar el criterio de “igualdad para todos”, pues ahora esa tarea quedaba en manos de los movimientos y, más precisamente, de sus referentes, quienes ejercían la tarea de la redistribución en sus hogares, asumiendo los gastos de flete y traslado de la mercadería. De modo que, al conceder recursos a los movimientos, el Estado se desobligaba de una serie de tareas que le demandaban gastos e inversión en tareas de capacitación y adiestramiento del personal técnico. Al mismo tiempo que, si bien les daba mayor autonomía y grados de libertad a las organizaciones, como la posibilidad de “dar de baja” y reemplazar beneficiarios y de aplicar criterios propios (privilegiar a familias con miembros presos, en lugar de la vivienda precaria mediante la agencia de asistentes sociales), no es menos cierto que los volúmenes de recursos concedidos a los piqueteros eran bien menores. Del total de planes que recibía el municipio sólo el 5% era administrado por la FTV, al igual que los volúmenes de mercadería que recibía el municipio eran muy superiores a los concedidos a la FTV. Si bien no dispongo de valores oficiales, en una oportunidad Rubén me llevó a conocer el predio donde se “embolsaba la mercadería”: se trataba de un galpón que ocupaba toda una manzana y donde el proceso se desdoblaba en diversos circuitos: una parte correspondía al Comité de Crisis que atendía a 14 barrios “con necesidades más urgentes”; otra parte se destinaba a madres y niños desnutridos y otra, personas mayores de sesenta años, que era redistribuida por delegaciones que funcionaban en cada una de quince localidades que componían el distrito de La Matanza. Por el contrario, la FTV recibía la mercadería en cuatro camiones, que no siempre cumplían en tiempo y forma, que se destinaba a 140 barrios de La Matanza y otros pocos barrios de otros municipios y el interior del país.

Por otra parte, así como los movimientos dependían del Estado para obtener recursos y así constituir sus tramas organizativas (Manzano 2007), no es menos cierto que el Estado necesitaba de los movimientos, básicamente, para movilizar personas por fuera de las estructura partidarias. En aquel período de 2006, la FTV participó de numerosos movilizaciones que encabezaba Néstor Kirchner y hasta algunos dirigentes cumplían allí tareas de seguridad. Pero fue con la creación de la Subsecretaría de Tierras y Hábitat Social donde el lazo se estrechó aún más y el movimiento adquirió una nueva posición en la escena política nacional. Dicha subsecretaría debía ejecutar programas de vivienda y promover la regulación dominial de asentamientos irregulares. Al conceder la titularidad al presidente de la FTV, el Estado no sólo reconocía su trayectoria como líder en la conformación y regulación de asentamientos urbanos (donde la organización demarcaba su origen) sino que también señalaba su posición de liderazgo dentro de una comunidad moral, lo que, para el movimiento, se traducía en una nueva legitimidad en la medida en que podía movilizar estructuras y recursos del Estado que se constituían en un poderoso argumento para atraer nuevas personas a la organización.

Y, finalmente, no olvidemos que los piqueteros se incorporaban a puestos en el gobierno, ya sea en cargos electivos, en las mismas listas que los

peronistas y también en puestos designados por el Presidente de la Nación. En suma, el Estado también dependía de los movimientos ya que estos no sólo eran interlocutores que demandaban sino que también podían constituirse en redes que le proveían tanto personas movilizadas como individuos con perfil para ocupar puestos de jerarquía en ministerios nacionales, al igual que candidatos para cubrir cargos en vacantes electorales, lo que, finalmente, se traduciría en votos.

De modo que la tan mentada competencia entre peronistas (clientelares) y piqueteros (beligerantes) fue posible por un profundo cambio en la figuración social (Elías 1991), favorecida por una conjunción de condiciones sociales: crisis en el mundo del trabajo, reforma del Estado, disponibilidad de recursos públicos, como planes y mercaderías, y constitución de nuevos liderazgos por fuera de las estructuras tradicionales. Tales transformaciones nos permiten no sólo explicar cómo la competencia entre los dos agentes se había tornado posible sino también, aun así, cómo era que el equilibrio de fuerzas lograba mantenerse. Un primer indicio era la condena moral a los dadores, como Rubén o Gabriela, por parte de sus vecinos, como mecanismo regulador. Pero no podemos agotar la explicación allí, pues, de esa manera, estaríamos señalando que la dinámica de los circuitos se reduce a los barrios cristalizando así procesos sociales como sistemas autorregulados donde el equilibrio de fuerzas es sólo restablecido por la condena moral. Como vimos, había otros elementos en juego que no se ceñían al barrio sino que configuraban relaciones de poder y dominación que involucraban al Estado, los movimientos y el Partido Justicialista. Más precisamente, a la capacidad del Estado para negociar en otros ámbitos desde “La Matanza movilizada” y a la visión del Estado en tanto gobierno con su capacidad para movilizar buena parte de sus estructuras con la intención de neutralizar el conflicto social.

CONCLUSIONES

La oposición y competencia entre peronistas y piqueteros es una constante en la literatura académica sobre movimientos sociales. Tal oposición es señalada, en su versión positiva, como un desafío al monopolio político del PJ y también, de manera negativa, en tanto suponía la pérdida de autonomía de las organizaciones y su institucionalización como agente mediador entre el Estado y la población. Busqué explicar cómo tal oposición y competencia había sido posible, sin caer en la trampa del dualismo dicotómico entre “peronistas clientelares” y “piqueteros beligerantes”, lo que fue posible gracias a ciertas opciones metodológicas. Partí de una etnografía en dos barrios de La Matanza con dadores vinculados al Partido Justicialista y a la Federación de Tierra y Vivienda respectivamente, lo que permitió identificar similitudes y diferencias en las modalidades de redistribución de recursos: los grados de autonomía concedidos por el Estado a cada uno. Para ello, fue necesario invertir el abordaje con que la literatura clásica sobre movimientos sociales analiza la relación de estos con el Estado. Esto es, más que detenerme en la dependencia que los movimientos sociales mantienen con el Estado para obtener recursos y así reclutar personas y dar forma a su organización, preferí identificar la dependencia que el Estado

mantiene con los movimientos. De esa manera, fue posible percibir que al conceder planes y mercaderías a las organizaciones piqueteras, el Estado se desprendía de una serie de tareas burocráticas de gestión, capacitación e inversión de recursos, a la vez que aquellas se constituían en proveedoras de personas movilizadas, de funcionarios públicos y de candidatos electorales. De manera que la FTV, al proveer candidatos para las mismas listas electorales que el PJ, contribuía a neutralizar el conflicto y la disputa que solía acecharlos en los barrios cuando los vecinos se “pasaban” de un dador a otro. Ahora, ambos agentes contribuían a sostener el mismo gobierno que les retribuía con recursos que gestionaban con grados de autonomía diversos para mantener sus redes y tramas organizativas. Las evidencias recogidas en Santa Rita y El Ingenio son los suficientemente relevantes para generar una reflexión sobre modalidades de redistribución de recursos. Particularmente, en lo relativo a la redefinición de los límites entre campos diversos de especialización, como las políticas públicas, los movimientos sociales y la política. Las políticas públicas gestadas desde los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social eran recibidas en los barrios mediante redes preexistentes que constituían personas unidas por lazos de vecindad, parentesco y compadrazgo. Lo mismo podía decirse de los movimientos sociales y de la política, tributaria de esas mismas relaciones. De modo que la demanda de recursos mediante piquetes no es causa sino una resultante producida por los movimientos y alimentada por las políticas de Estado. Siempre que haya individuos dispuestos a atender las invitaciones de los referentes, sean peronistas y piqueteros, ellos participan de acciones que suelen ser calificadas como “políticas”. Varios son los efectos de esa participación: fortalecer un candidato, constituir la trama de un movimiento, erigir un gobierno y, en particular, y gracias a ella, que muchos individuos consigan obtener atención y ser contemplados por el Estado beneficiándose al recibir un plan o una bolsa de mercadería o quedar habilitados para llevar a sus hijos a almorzar a un comedor comunitario. Si no fuera por ese entramado de relaciones recíprocas, muchos de ellos permanecerían ignorados o siendo beneficiados con programas puntuales en situación de emergencia. Así, el caso de La Matanza ilumina algunos aspectos y provee algunas pistas para nuevos estudios y modelos de análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Auyero, J. (1997). Evita como performance. Mediación y resolución de problemas entre los pobres urbanos del Gran Buenos Aires. En J. Auyero (comp.), *¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo* (pp. 167-232). Buenos Aires: Losada.

_____ (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelares del peronismo*. Buenos Aires. Editorial Manantial.

Auyero, J. (2002). Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina. *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 42, N° 166, pp. 187-210.

Alayón, N. y E. Grassi (comp.) (1983). *El Trabajo Social de hoy y el mito de*

la Asistente Social. Buenos Aires. Humanitas.

Colabella, L. (2009). Fazer política ou lutar pelo social. Uma etnografia das formas de redistribuição na Grande Buenos Aires. Tese de Doutorado. PPGAS-MN-UFRJ.

_____ (2010). Padrões e clientes ou redistribuição entre iguais? Uma reflexão sobre clientelismo e suas transposições contextuais. *Revista Mana. Estudos de Antropologia Social*, 16(2), pp. 287-310.

Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires. Libros del Rojas, EUDEBA.

Diani, M. (2003). Networks and social movements: a research programme. En M. Diani y D. McAdam (comp.), *Social Movements and networks. Relational approaches to collective action* (pp. 299-319). Oxford: Oxford University Press.

Elias, N. (1991). *Qu'est-ce que la sociologie?* Marselha. Editions de l'Aube.

Ferraudi Curto, M. (2006). Mientras tanto: política y modo de vida en una organización piquetera. Tesis de Maestría. IDES-UNSAM.

Frederic, S. y G. Soprano (2008). Panorama Político: Antropología y Política en la Argentina. *Estudios de Antropología Social*, Vol. 1, N° 1, pp. 132-190.

Golbert, L. (1992). La asistencia alimentaria. Un nuevo problema para los argentinos. En S. Lumi, L. Golbert y E. Tenti y Fanfani, *La mano izquierda del Estado. La asistencia social según los beneficiarios* (pp.43-65). Buenos Aires: Editorial Mino y Dávila.

Grassi, E. (1986). Coyuntura histórica y trabajo social. En N. Alayón (comp.), *Reflexiones sobre Trabajo Social* (pp. 65-71). Buenos Aires: Humanitas.

Hintze, S. (1989a). *Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina (Vol. 1).

_____ (1989b). *Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina (Vol. 2).

MacAdam, D. (2003). Beyond structural analysis: toward a more dynamic understanding of social movements. En M. Diani y D. McAdam (comp.), *Social Movements and networks. Relational approaches to collective action* (pp. 281-290). Oxford: Oxford University Press.

Manzano, V. (2007). De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete: Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social. Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Masson, L. (2002). La villa como aldea. En *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII* (pp. 71-78).

Mauss, M. (2003). Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. En *Sociologia e Antropologia* (pp. 184-314). São Paulo: Cosac & Naif.

Mazzeo, M. (2004). *Piqueteros: Notas para una tipología*. Buenos Aires. Manuel Suarez Editor.

Quirós, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires. Editorial Antropofagia.

_____ (2008). Piqueteros y Peronistas en la *lucha* del Gran Buenos Aires.

Por una visión no instrumental de la política popular. *Cuadernos de Antropología Social*, N° 27, pp. 113-131.

_____ (2010). Por que vem. Figuração. Pessoa e experiência na política da Grande Buenos Aires. Tese de Doutorado. PPGAS- MN- UFRJ.

Rodriguez, L. (2005). Las mujeres mercosureñas: el MERCOSUR con mirada de género. En S. Frederic y G. Soprano (comp.), *Cultura y política en etnografías sobre la Argentina* (pp. 219-270). Bernal: Editorial de la Universidad de Quilmes.

Rosato, Ana. (2003). Líderes y candidatos: las elecciones 'internas' en un partido político. En A. Rosato y F. Balbi (comp.), *Representaciones sociales y procesos políticos. Estudios desde la Antropología Social* (pp. 61-80). Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

Sigaud, L. (2000). A forma acampamento Notas a partir da versão Pernambucana. *Novos Estudos CEBRAP*, N° 58, pp. 73-92.

_____ (2005). As condições de possibilidade das ocupações de terra. *Tempo Social, Revista de Sociologia da USP*, Vol 17, N° 1, pp. 255-280.

Soprano, G. (2002). A favor de una etnografía sobre clientelismo político y peronismo. *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, 42, 167, pp. 483-488.

_____ (2005). La producción de actores e identidades políticas en el peronismo durante una campaña electoral. En S. Frederic y G. Soprano (comp.), *Cultura y política en etnografías sobre la Argentina* (pp. 161-196). Bernal: Universidad de Quilmes.

_____ (2008). Recorriendo el espínel de la política. Identidades, redes y escenarios políticos nacionales, provinciales y municipales en el peronismo. En S. Frederic y G. Soprano (comp.), *Política y variaciones de escala en el análisis de la Argentina*. Buenos Aires: Universidad de General Sarmiento.

Svampa, M y S. Pereyra (2004). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires. Biblos.

Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Barcelona. Alianza Universidad.

Tilly, Ch. (2003). *The politics of collective violence*. Cambridge UK. Cambridge University Press.

_____ (2004). *Social movements (1768-2004)*. London. Paradigm Publishers.

Tilly, Ch. y L. Wood (2003). Contentious in Great Britian (1828-34). En M. Diani y D. McAdam (comp.), *Social Movements and networks. Relational approaches to collective action* (pp. 147-172). Oxford: Oxford University Press.

Vommaro, G. (2006). Acá no conseguís nada si no estás en política. Los sectores populares y la participación en espacios barriales de sociabilidad política. *Anuario Estudios de Antropología Social*, CAS, IDES, pp. 161-177.

Weber, M. (1996). *Economía y Sociedad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Zelizer, V. (1994). *The social meaning of Money: pin Money, paychecks, poor relief, and other currencies*. New York. Basic Books.